

Santiago, uno de junio de dos mil veintidós.

Visto:

En estos autos RIT O-190-2019, RUC 1940180797-K, del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, por sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se rechazó la demanda de declaración de existencia de relación laboral, despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones interpuesta por don Jean Paul Urrutia Herrera en contra del Servicio de Salud del Maule Hospital de Talca, con costas.

En contra del referido fallo, el demandante interpuso recurso de nulidad, que fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Talca, mediante resolución de treinta y uno de julio de dos mil veinte.

En contra de este fallo, la misma parte dedujo recurso de unificación de jurisprudencia pidiendo que se dicte el de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones sobre el asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar la copia fidedigna del o de los fallos que se invocan como fundamento.

Segundo: Que en cuanto a la unificación de jurisprudencia pretendida en estos autos por la demandante, en lo que se refiere a la materia de derecho objeto del juicio, dice relación con *“determinar la normativa aplicable a una persona natural contratada bajo la modalidad de honorarios, de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 18.834, por organismos del Estado, en atención a si las funciones desplegadas corresponden o no a los requisitos de contratación conforme a cometidos específicos, y si estas se han ejecutado bajo índices de subordinación y dependencia, de conformidad con el artículo 7 del Código del Trabajo”*, señalando que la interpretación que la sentencia impugnada asevera respecto de la materia en análisis, es contraria a lo sostenido por diversa jurisprudencia que cita, en el sentido que se debe aplicar el Código del Trabajo a las relaciones



existentes entre trabajadores y la administración del Estado, cuando ha existido un vínculo a partir de contratos a honorarios, pero con indicios de subordinación y dependencia en la prestación de servicios de forma continua y permanente.

Tercero: Que, para los efectos de fundar el recurso de unificación de jurisprudencia, cita las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de San Miguel en los autos rol N° 613-19 de 6 de enero de 2020 y la emanada de la Corte de Apelaciones de Santiago en el rol N° 1754-2017, de 21 de noviembre de 2017.

La primera de ellas, luego de dar por acreditado que el actor se desempeñó durante 7 años bajo diversos contratos a honorarios para ejecutar funciones de apoyo administrativo en el cargo de digitador en un consultorio médico dependiente de la Municipalidad de Paine, ejecutando funciones de registro de formularios de atención, digitalización de datos de pacientes y atenciones y otras análogas, concluyó que, al tratarse de funciones propias, habituales y permanentes de la administración del Estado, ordenadas y reguladas por la normativa que la creó, que se ejecutan en forma permanente y habitual, debe entenderse que la relación entre las partes, dado los caracteres que tuvo, se halla sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo, por desmarcarse del ámbito propio de su regulación estatutaria y que así, encuentra cobijo en la hipótesis de contra excepción del artículo 1 de dicho código.

La segunda sentencia que acompaña como contraste, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, razona de una manera similar, respecto de una funcionaria que se desempeñó por 4 años como secretaria y administrativa en la Dirección de Desarrollo Comunal de la Municipalidad de la Reina, vinculándose por sendos contratos a honorarios, concluyendo que se trata de funciones propias, habituales y permanentes del municipio, ordenadas y reguladas por su Ley Orgánica Constitucional, debiendo entenderse que se encuentran sujetas a lo dispuesto por el Código del Trabajo, por desmarcarse del ámbito propio de su regulación estatutaria, encontrando cobijo en la contra excepción del artículo 1 del estatuto laboral.

Cuarto: Que, en contrario de lo resuelto en las sentencias de contraste referidas en la motivación precedente, el fallo impugnado dirimió la controversia expresando que “ *...la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, distingue claramente entre la función desempeñada a título de titular o planta, con aquella desempeñada en condición de honorarios, como acontece con la que cumplía el recurrente, autorizada por artículo 11 del mencionado estatuto...Las máximas de*



la experiencia nos indican que los organismos públicos para no incrementar la planta permanente, recurren al expediente de contratar a honorarios para aquellas actividades descritas en el mencionado artículo del estatuto, lo que el contratante acepta firmando el correspondiente contrato a honorarios y facturando o entregando boletas por sus servicios”.

Concluyó señalando que “...De consiguiente no hay infracción de ley al razonar como lo hace el juez sentenciador, lo que no se opone a la jurisprudencia que cita y reproduce, ya que en este caso está debidamente establecido que fue contratado para un cometido específico. Cabe considerar que el manejo estadístico y de archivo, no es la tarea esencial de un nosocomio, sino que una secundaria que puede ser externalizada sin problemas. De consiguiente el juez al dar en su sentencia razones lógicas y fundadas de porque aplica el Estatuto Administrativo y no el Código del Trabajo, no ha infringido la ley, menos en su considerando undécimo que resulta ser corolario de lo antes razonado”.

Quinto: Que, por lo tanto, concurren dos interpretaciones sobre una idéntica materia de derecho, presupuesto necesario del recurso de unificación de jurisprudencia, por lo que se debe establecer cuál es la correcta, lo que se traduce en determinar que estatuto jurídico regula la vinculación que se genera entre una persona natural que se desempeña en una entidad perteneciente a la Administración del Estado -en este caso el Servicio de Salud del Maule- y ésta última, cuando su ejercicio no se encuadra en los términos de la normativa conforme a la cual se incorporó a la dotación del ente respectivo.

Sexto: Que, a los efectos de asentar la recta exégesis en el negocio, es menester traer a colación el artículo 1 del Código del Trabajo, que prescribe: “*Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.*

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias



no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este Código”.

Séptimo: Que, asimismo, conviene recordar que el artículo 11 de la Ley N° 18.834, preceptúa: *“Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.*

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

Octavo: Que, acorde con la normativa hasta ahora reproducida, la premisa está constituida por la vigencia del Código del Trabajo respecto de todas las vinculaciones de índole laboral habidas entre empleadores y trabajadores, y se entienden por tal, en general, aquellas que reúnen las características derivadas de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7 del ordenamiento aludido, esto es, la relación en la que concurren la prestación de servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación y el pago de una remuneración por dicha tarea, donde la presencia de aquéllas constituye el elemento esencial, determinante y distintivo de una relación de este tipo.

Noveno: Que, en el reseñado artículo 1 del Código del Trabajo, se consignan, además de la ya indicada premisa genérica, una excepción a la aplicación de esta compilación al personal de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, salvedad restringida únicamente al evento que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Empero, también encierra una contra excepción que abarca a todos los trabajadores de los entes detallados, a quienes se vuelve a la vigencia del Código del Trabajo, sólo en los aspectos o materias no regulados en sus



respectivos estatutos, siempre que no sean contrarios a estos últimos. En otros términos, se someten al Código del Trabajo y leyes complementarias los funcionarios de la Administración del Estado no acogidos por ley a un estatuto especial y, aun de contar con dicho régimen peculiar, en carácter de subsidiario, sobre los aspectos o materias no reglados en particular, cuando no se oponga a su marco jurídico.

Décimo: Que, por otra parte, es importante tener en consideración que el contrato a honorarios se ha erigido como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera, las que se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones del Código del Trabajo.

Undécimo: Que los trabajos que se efectúan conforme a esta última calidad jurídica constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato; siendo labores accidentales y no habituales del órgano pertinente aquéllas que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, es decir, aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente administrativo, pero, bajo ningún concepto, se pueden desarrollar de manera permanente conforme dicha modalidad.

Duodécimo: Que, por consiguiente, si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la Administración del Estado bajo la modalidad contemplada en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, pero, no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico, esto es, a través de la



verificación de indicios materiales que dan cuenta del cumplimiento de las órdenes, condiciones y fines que el empleador establece, y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral. Lo anterior, porque, como se dijo, el Código del Trabajo constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato de trabajo, el trabajador queda al margen del Estatuto Laboral, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna.

Decimotercero: Que, entonces, la acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en armonía con el artículo 11 de la Ley N° 18.834, tal como esta Corte lo ha referido desde los autos Roles N 11.584-2015 y N° 8.002-2015 en adelante, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírsele el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se desempeñan en las condiciones previstas por el Código del ramo. Bajo este prisma debe uniformarse la jurisprudencia, en el sentido que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sujetas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que dichos lazos se desarrollen fuera del marco legal que establece el artículo 11 de la Ley N° 18.834, que autoriza la contratación, sobre la base de honorarios, ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias determinadas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.

Decimocuarto: Que tal decisión no implica desconocer la facultad de la Administración para contratar bajo el régimen de honorarios que consulta el artículo 11 de la Ley N° 18.834, por lo que no se vislumbran problemas de colisión entre las preceptos del citado Código y del estatuto funcionario aludido, sino sólo explicitar los presupuestos de procedencia normativa que subyacen en cada caso para discernir la regla pertinente, y lo será aquella que se erige en el mencionado artículo 11 siempre que el contrato a honorarios sea manifestación de un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado, pueda contar con la asesoría de expertos en asuntos precisos, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habituales.



Decimoquinto: Que, en consecuencia, para resolver la litis se debe establecer si la demandante en el ejercicio de las funciones que le fueron cometidas desplegó un quehacer específico y acotado en el tiempo -como lo ordena el citado artículo 11 de la Ley N° 18.834-, o si, por el contrario, desarrolló una labor permanente bajo las condiciones de subordinación y dependencia de su empleador. En tal virtud, de acuerdo a los contratos a honorarios incorporados, se estableció que el actor desde el 1 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2018 se desempeñó como administrativo de archivo del Hospital Regional de Talca, prestando servicios y ejecutando funciones relacionadas con el manejo, resguardo y tramitación de fichas clínicas en el servicio de estadísticas de dicho organismo, según los requerimientos que se generaban diariamente de dichos documentos por parte del personal de los distintos estamentos y departamentos del hospital.

De los mismos contratos se desprende que el actor debía cumplir sus funciones controlando el acatamientos a la normativa legal vigente, desempeñando labores en dependencias del Hospital Regional de Talca, recibiendo instrucciones y bajo subordinación de su jefatura directa.

Además, se asentó en los contratos a honorarios que Servicio de Salud del Maule se obligaba a entregar al demandante una serie de beneficios como feriados; permisos; licencias médicas, entre otros, que eran los mismos que eran percibidos por los funcionarios de la Administración.

Decimosexto: Que, del análisis conjunto de las normas reproducidas y del carácter de los contratos de honorarios suscritos entre la demandada y el demandante, aparece que se trata de una modalidad de la que no puede sostenerse que la relación existente entre las partes se enmarcó dentro de la hipótesis excepcional contenida en el artículo 11 de la ley N° 18.834.

Decimoséptimo: Que por no tratarse de funciones accidentales o ajenas, mal puede sostenerse que la de autos, se trata de una relación contractual amparada por la norma aludida, sino más bien, una que, dado los caracteres que tuvo, queda sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo, por desmarcarse del ámbito propio de su regulación estatutaria y que así, encuentra amplio cobijo en la hipótesis de contra excepción del artículo 1 de dicho cuerpo legal.

Decimooctavo: Que, en semejante supuesto, corresponde aplicar las normas del referido estatuto a todos los vínculos de orden laboral que se generan entre empleadores y trabajadores, y debe entenderse por tal aquéllos que reúnen las características que surgen de la definición que de contrato de trabajo consigna



el artículo 7 del Código del ramo, o sea, que se trate de servicios personales, intelectuales o materiales que se prestan bajo un régimen de dependencia o subordinación, por los que se paga una remuneración.

Decimonoveno: Que, en estas condiciones, yerran los sentenciadores de la Corte de Apelaciones de Talca al calificar la relación contractual de los litigantes como una que se enmarcó dentro del régimen especial de la Ley N° 18.884 y, estimando, consecuentemente inaplicable el Código del Trabajo, porque la conducta desplegada por el actor en el ejercicio de su labor no cumple los requisitos que la norma especial exige.

Sobre esta premisa discurre el recurso de nulidad planteado por el demandante, fundado, en lo pertinente, en las causales de los artículos 478 letra c) y 477 del citado texto legal, esta última en relación con los artículos 1, 7, 8, del mismo cuerpo legal y artículo 11 del Estatuto Administrativo, toda vez que el ordenamiento laboral se aplica a las personas contratadas a honorarios en un órgano de la Administración del Estado, siempre y cuando, se advierta que la labor que desempeñan no se enmarca dentro del tipo que el referido artículo 11 de la Ley N° 18.834 ordena, y se acredita, como se estableció precedentemente, la concurrencia de los requisitos que enumera el artículo 7 del Código del Trabajo, esto es, subordinación y dependencia.

Vigésimo: Que, conforme a lo razonado, y habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de la materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá ser acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se acoge** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante respecto de la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veinte, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Talca, que rechazó el recurso de nulidad que dedujo en contra de la dictada con fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve por el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, en los autos RIT O-190-2019, RUC 1940180797-K, declarando que ésta última **es nula**, y acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, se dicta la correspondiente sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

Regístrese.

Rol N° 124.366-2020.-



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., y los abogados Integrantes señor Diego Munita L., y señora Carolina Coppo D. No firma la Ministra señora Gajardo y la abogada integrante señora Coppo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso la primera y por estar ausente el segundo. Santiago, uno de junio de dos mil veintidós.

RICARDO LUIS HERNÁN BLANCO
HERRERA
MINISTRO
Fecha: 01/06/2022 18:08:35

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ
SANCHEZ
MINISTRA
Fecha: 01/06/2022 18:08:35

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 01/06/2022 18:08:36



RGFYZRBCXX

En Santiago, a uno de junio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, uno de junio de dos mil veintidós.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 483 C del Código del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

Visto:

De la sentencia de base de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, se reproducen sus motivaciones primera a octava, eliminándose las demás.

Asimismo, se reproducen los motivos sexto a duodécimo de la sentencia de unificación de jurisprudencia que antecede.

Y se tiene, además, presente:

1°.- Que, para resolver la litis, se debe establecer si la demandante en el ejercicio de las funciones que le fueron cometidas desplegó un quehacer específico y acotado en el tiempo -como lo ordena el artículo 11 de la Ley N° 18.834-, o si, por el contrario, desarrolló una labor permanente bajo las condiciones de subordinación y dependencia de su empleador.

2°.- Que en relación con la manifestación del ejercicio de la subordinación y dependencia, la prestación de servicios en forma permanente durante dos años y dos meses años en forma continua para el servicio en labores que le son propias en recintos de la entidad, la existencia de beneficios propios de un contrato de trabajo como licencias médicas y permisos especiales, y el hecho que las funciones se prestaban en horarios fijados previamente, respecto de actividades y labores con permanencia en el tiempo, son antecedentes suficientes para concluir que el actor se desempeñó en tal calidad.

3°.- Que, atendida la presencia de los supuestos fácticos establecidos, se concluye de manera inconcusa que el demandante desarrolló para la demandada una labor de manera dependiente, por cuenta ajena y por la cual recibió mensualmente una retribución monetaria, es decir, en las condiciones señaladas en el Código del Trabajo, puesto que sus funciones se extendieron en el tiempo y bajo las órdenes de aquélla, de manera que, en esas circunstancias, la naturaleza de la relación contractual es de carácter laboral, al cumplirse los requisitos que contempla el artículo 7 del Código del Trabajo y, por lo tanto, no se circunscribe a la descrita en el artículo 11 de la Ley N° 18.834.

4°.- Que, sobre la base de los hechos asentados y su calificación jurídica, resulta evidente que el término de los servicios del actor se produjo el 31 de



diciembre de 2018 por despido carente de causa legal, amparándose en una contratación a honorarios permitida por la ley, la que, como se dijo, no fue tal, sino que se trató de una relación de naturaleza laboral que genera las consecuencias propias de esa vinculación, establecidas en el Código del ramo, debiendo accederse a las indemnizaciones y compensaciones reclamadas por el demandante en la forma que se indicará.

5°.- Que en cuanto a lo pretendido por el actor por concepto de nulidad del despido, considerando que el fallo sólo constató una situación preexistente, debe entenderse que la obligación de enterar las cotizaciones previsionales se encuentra vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, esto es, desde la data en que las partes iniciaron realmente la relación laboral.

No obstante lo expuesto, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la Ley N° 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

En otra línea argumentativa, la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

Por lo razonado, no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

Lo anterior no altera la obligación de enterar las cotizaciones previsionales adeudadas por el período en que se reconoció la existencia de la relación laboral.



6°.- Que, para los efectos de fijar las indemnizaciones a que haya lugar, se tendrá como base de cálculo la cantidad percibida mensualmente por el actor, esto es, la suma de \$411.369, que corresponde al promedio de las últimas remuneraciones, según lo razonado en la demanda y la prueba documental incorporada.

7°.- Que se desestimarán las demás prestaciones solicitadas, por ausencia de antecedentes probatorios que las justifiquen.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 9, 41, 162, 163, 168, 420, 425 y 459 el Código del Trabajo, se decide que:

Se **acoge** la demanda interpuesta por don Jean Paul Urrutia Herrera en contra del Servicio de Salud del Maule Hospital de Talca, **sólo en cuanto:**

I.- Se declara la existencia de una relación laboral entre las partes desde el 1 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2018, y que el despido de que fue objeto el actor es injustificado. En consecuencia, se condena a la demandada a pagar los conceptos que se señalan:

a) \$411.369 por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso previo; y \$822.738 por concepto de indemnización por dos años de servicios, tomando como base de cálculo la remuneración a que alude la motivación sexta de esta sentencia.

b) Recargo legal del 50 % de conformidad con el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo.

d).- Feriado legal y proporcional en los términos solicitados en la demanda.

e).- Cotizaciones previsionales por el tiempo durante el cual se extendió la relación laboral, debiendo oficiarse a las entidades pertinentes para los fines a que haya lugar.

II.- Las sumas señaladas deberán pagarse con los reajustes e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. .

III.- Cada parte soportará sus costas.

IV.- Se rechaza en lo demás la demanda.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 124.366-2020.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., y los abogados Integrantes señor Diego Munita L., y señora Carolina Coppo D. No firma la Ministra señora Gajardo y la abogada integrante señora Coppo, no obstante



haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso la primera y por estar ausente el segundo. Santiago, uno de junio de dos mil veintidós.

RICARDO LUIS HERNÁN BLANCO
HERRERA
MINISTRO
Fecha: 01/06/2022 18:08:37

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ
SANCHEZ
MINISTRA
Fecha: 01/06/2022 18:08:38

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 01/06/2022 18:08:38



En Santiago, a uno de junio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

